

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DE ITAGÜÍ: DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS

Horacio Hoyos Alzate

Resumen

Este *policy brief* presenta las condiciones actuales en materia de prestación de servicios públicos en asentamientos irregulares del Municipio de Itagüí, ubicados en el corregimiento El Manzanillo, a través de la identificación de los actores y problemáticas existentes, que impiden una cobertura total y un servicio de calidad para los habitantes de este territorio. De esta manera, el documento hace algunas recomendaciones al final, que pueden ayudar a planear y proyectar con mayor precisión la ampliación y mejora de los servicios, tanto por parte de la administración como de las empresas operadoras.

Introducción

Este documento surge a partir del interés por conocer las condiciones actuales en la prestación de servicios públicos en el corregimiento El Manzanillo del municipio de Itagüí y, específicamente, de los problemas que dificultan las eventuales mejoras que pudieran implementarse para optimizar las condiciones de vida de un amplio sector de la población, que aún no cuenta con alguno de los principales servicios o que los recibe de manera interrumpida, siendo insuficiente para atender las necesidades cotidianas. Este trabajo, por lo tanto, se centra en la zona del municipio más afectada por la falta de servicios públicos, como es el corregimiento El Manzanillo, territorio rural o periurbano que pese a la cercanía a grandes centros poblados y a pertenecer al Área Metropolitana del Valle de Aburra, presenta una alta desigualdad en la prestación de estos servicios básicos respecto al resto de la población.

El enfoque del presente estudio fue, básicamente, cuantitativo, pues a través de mediciones esencialmente numéricas, se buscó cuantificar, medir y reportar cual es la situación actual en materia de prestación de servicios públicos. De hecho, la mayor parte de la documentación recopilada, así como su análisis es y recibe un tratamiento cuantitativo. Para el levantamiento de la información, se hizo uso de diferentes fuentes, técnicas e instrumentos, como fue el análisis de información estadística, las encuestas y una entrevista a un líder comunitario. De esta manera, el documento hace un recorrido por algunos de los principales antecedentes, se definen algunos conceptos importantes para la comprensión del problema y se realiza una caracterización del Corregimiento El Manzanillo, aportando diferentes datos demográficos y estadísticos, producto de encuestas a la población.

1. Antecedentes y conceptos

1.1. Antecedentes sobre los asentamientos irregulares en Itagüí

Sobre los asentamientos irregulares, se ha escrito abundante bibliografía, pero casi todos los autores coinciden en definir estos como un hábitat popular que ha sido auto producido progresivamente por la gente más pobre y vulnerable, "ajeno a los principios de la planeación urbana institucionalizada (...) considerado por las autoridades como una desviación de los modelos <<normales>> que no tenía cabida en la ciudad" (Delgadillo. 2016). Es decir, que se habla de dos lógicas y racionalidades urbanas opuestas. En este sentido, Costa y Hernández (2010), afirman que las metrópolis contemporáneas experimentan dos realidades y circunstancias paralelas. "La primera es la realidad oficial consecuencia de la estricta planificación urbanística; la otra es consecuencia de los procesos informales que generan los propios ciudadanos en su vida cotidiana (Costa y Hernández. 2010). Por consiguiente, la ciudad presente es el resultado de la interacción de estos dos procesos o lógicas. Articular armónicamente esas dos lógicas, de tal manera que se

genere "seguridad de la tenencia e integración socio espacial" (Fernández. 2008), demanda el repensar las políticas públicas imperantes, en materia de legalización.

En Colombia, las instituciones encargadas de atender necesidades de legalización o formalización de tierras no han contado a menudo con los suficientes recursos, como se desprende de un reciente estudio del Incoder. A esta problemática, se le suman otras causas históricas, como la concentración de la tierra o el inapropiado uso del suelo, así como los conflictos que esto origina, además del conflicto armado interno. En lo que respecta al área Metropolitana del Valle de Aburrá, se destaca en los últimos años la implementación del Programa Metropolitano de Mejoramiento Integral de Barrios del Valle de Aburrá - PMMIB-VA, a cargo de la entidad Área Metropolitana. Este tipo de iniciativas metropolitanas de mejoramiento integral de barrios y de asentamientos irregulares en los municipios, acarrearán beneficios, permitiendo un crecimiento planificado y ordenado del territorio. Y aunque es un programa de iniciativa pública, genera una mayor voluntad privada para la implementación del plan por los efectos que esto tiene en la legalización del suelo y la construcción, puesto que la flexibilización normativa que acompaña a menudo estos procesos permite incorporar a la legalidad un número mayor de construcciones, conservando lo existente sin afectar drásticamente un territorio o lo que significa lo mismo, generando un reconocimiento de lo que existe, pero respetando los principios que subyacen al tratamiento de mejoramiento integral.

Para el Municipio de Itagüí, la situación en materia de formalización de predios no ha sido muy diferente a la del resto del Área Metropolitana e incluso del país. Para ilustrar tal situación, resulta pertinente un artículo del periódico El Mundo publicado en enero de 2011. En dicho artículo, se recrea la historia de ocupación del sector La Cruz de Itagüí, mostrando las distintas dinámicas, intereses y actores que hacen de este un problema complejo. Dice el artículo, que durante la década de los setenta

arribaron a Itagüí dos familias provenientes de los municipios de Titiribí y Heliconia, buscando oportunidades de subsistencia como recicladores en el basurero municipal, pero al ser clausurado, dicho espacio se convirtió en un barrio de invasión en una dinámica muy similar a la experimentada en otras zonas del Área Metropolitana (El Mundo. 2011). Hacia finales de la década del ochenta, ya existían más de 200 familias asentadas en este terreno.

1.2. Antecedentes sobre el acceso a servicios públicos

Sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios, se han adelantado diversos trabajos, con distintos alcances, enfoques y propósitos. Algunos abordan el tema desde un enfoque del derecho administrativo, otros desde la posición de los usuarios, del mercado, las tarifas o, incluso, trabajos que desarrollan aspectos más técnicos, relacionados a la calidad de los servicios. También existen diversas investigaciones que abordan la prestación de servicios públicos a población vulnerable. Por ejemplo, Hernández| (2014), luego de recalcar el carácter de esencialidad de los servicios públicos, consagrado en la Constitución Política, pero aclarando que a pesar de ello no son considerados fundamentales, afirma que

partiendo de la esencialidad de los servicios públicos domiciliarios para alcanzar un nivel de vida digna, existen segmentos de la población que, debido a su especial condición de vulnerabilidad, no logran cumplir dicho fin. En este orden de ideas, se define como población en situación de vulnerabilidad, el conjunto de personas o grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de fragilidad, bien sea por su condición étnica, de género, edad, capacidad funcional, nivel económico, cultural y que requieren de una atención especializada por parte de las entidades del Estado (...)En nuestro país, si bien la Constitución contempla que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra en cabeza del Estado, no contempla que la prestación de los mismos sea un derecho fundamental, en especial para las personas en especial protección de vulnerabilidad (Hernández. 2014: p16).

La aclaración que hace la autora, es de gran importancia para comprender, al menos en parte, las ambigüedades, vacíos o contradicciones normativas que subyacen a la problemática estudiada e impiden garantizarle un mínimo de acceso de estos servicios a la población más vulnerable, como es el caso de aquella asentada irregularmente en sectores del corregimiento El Manzanillo de municipio de Itagüí, puesto que mientras por un lado la normatividad vigente exige una prestación global de los servicios públicos a toda la población, simultáneamente restringe las posibilidades del servicio a ciertas zonas, como lo son las de alto riesgo, ya ocupadas y en ocasiones densamente pobladas, lo cual dificulta significativamente el accionar de las administraciones y deja a un sector de la población con limitaciones en dichos servicios.

Ahora bien, el actual sistema para la prestación y regulación de los servicios públicos en Colombia, se empieza a consolidar en la década de 1990 y, específicamente, con la Constitución Política de 1991, la cual introdujo importantes reformas a la manera como estos se venían prestando. En este sentido, Valencia (2006) sostiene que los servicios públicos domiciliarios en Colombia tuvieron importantes cambios "se permitió la entrada del sector privado y se les dio participación a los usuarios en la vigilancia y control de estos servicios (Valencia. 2006). Sin embargo, debido al carácter monopólico de estos servicios se requirió diseñar nuevos mecanismos institucionales que le ayuden al usuario. No obstante, a pesar de estos mecanismos, los usuarios no siempre logran hacer prevalecer su bienestar y aquellos que no logran el estatus de usuario, mucho menos. En este marco de reformas de apertura, privatización, competencia y modernización del Estado, donde el propósito esencial consistía en la transferencia del monopolio estatal a un ente privado más eficaz y eficiente, los servicios públicos domiciliarios entran en esta tendencia a partir de la Ley 142 de 1994, "la cual otorga una serie de reconocimientos a los agentes privados en aras de conseguir un elemento que al Estado colombiano le había costado

demasiado: la ampliación de la cobertura de acuerdo con un esquema financiero sostenible” (Cajamarca y Lovich. 2014).

Pero, ¿qué se entiende por calidad en los servicios públicos? Según Nevado (2003), es necesario desprenderse de los antiguos cánones a la hora de entender el concepto de calidad en los servicios públicos

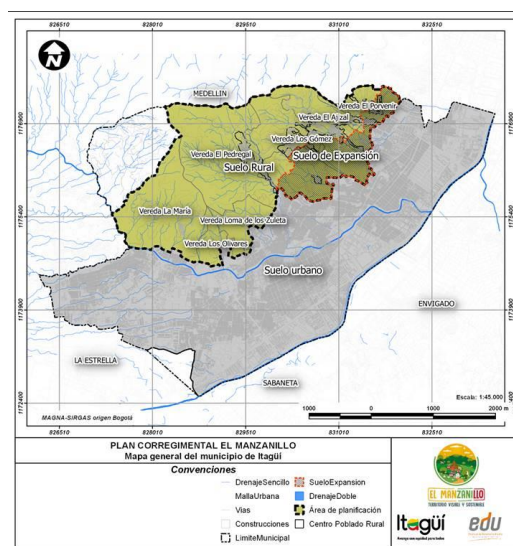
tanto en su aplicación a servicios administrativos como a servicios públicos de carácter material o técnico (especialmente a estos últimos), su carácter monopolístico y de mínimos configura un estrecho espacio donde pueda encontrar holgado acomodo. Evidentemente, aun cuando la prestación de determinados servicios (...) mantiene el rasgo del monopolio público, cabe la duda de que la realidad de dicha prestación se ha tornado mucho más abierta; que ha tomado en consideración aspectos hasta fechas relativamente recientes, sólo conocidos en el sector privado, cuya sumatoria trae como resultado la buscada calidad en la prestación, y que ha colmado de forma satisfactoria las necesidades y preferencias de los ciudadanos. Pues bien, de forma muy sencilla y general, al tomar las nociones más usadas, podemos afirmar que la calidad supone responder de forma regular y continua a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos. Definición que, pese a su aparente simplicidad, presenta una mayor complejidad, si se reflexiona sobre ella de forma más pausada (Nevado (2003).

2. Resultados

2.1. Caracterización del territorio

El corregimiento El Manzanillo se ubica en la margen suroccidental del Valle de Aburrá y constituye el suelo rural del municipio de Itagüí, donde al tomar como referencia los datos del Anuario Estadístico de Antioquia 2016 y del Plan Corregimental, se define un total de 30.605 habitantes en sus ocho veredas.

Mapa 3: zonificación del suelo rural del Municipio de Itagüí



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Plan corregimental El Manzanillo (2017).

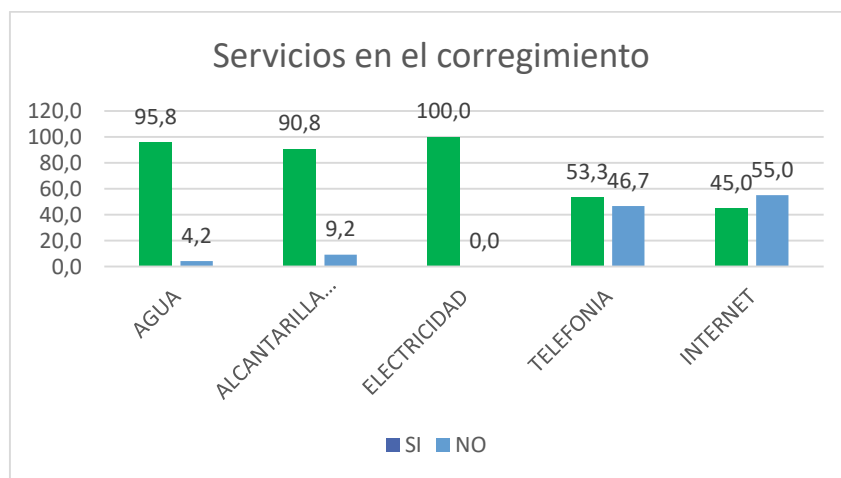
En el Mapa se puede apreciar que, en la zonificación del suelo rural del municipio, se observa en verde oscuro una amplia zona de expansión urbana. Esto se debe a la falta de suelos de expansión en otras zonas del municipio y significará a futuro una reducción del suelo rural, así como una mayor demanda de servicios públicos en la zona. Adicionalmente, el corregimiento es un territorio que presenta diferentes problemáticas y conflictos de tipo social, natural y físico-espacial.

Para poder conocer un poco mejor la actual situación respecto a las condiciones como se lleva a cabo la prestación de servicios públicos en el corregimiento, se realizó una encuesta a 120 habitantes mayores de edad de todas las veredas. Al

preguntarle a las personas sobre su lugar de nacimiento, las respuestas fueron sumamente diversas y dispersas, evidenciando un alto flujo migratorio que ha venido ocupando desde hace varias décadas la zona rural de Itagüí y que es consistente con las cifras del Plan Corregimental (2017), adelantado por la administración municipal, donde sólo el 37% manifiestan ser de Itagüí. Además, un alto porcentaje de la población manifiesta ser víctima de la violencia o desplazada con casi un 30%, lo cual refuerza la alta llegada de población migrante. En cuanto al número de personas por vivienda, teniendo en cuenta que viviendas muy hacinadas demandan más servicios que viviendas poco hacinadas, se encontró que en la mayoría de casas viven entre 3 y 4 personas, aunque hay un porcentaje superior al 14% con viviendas donde habitan más de 5 personas.

Al preguntar con cuales servicios cuentan en el corregimiento, los resultados muestran una cobertura del 95,8% para agua potable (independientemente de la fuente de abastecimiento), 90,8% para alcantarillado y 100% en electricidad. Ahora bien, respecto a estos tres servicios básicos, las cifras de la encuesta son coherentes con las cifras oficiales de Planeación Municipal (2016), donde para estos tres mismos servicios se identifica una cobertura del 95,5%, 83,7% y 100% respectivamente (Dirección de Planeación Municipal. 2016).

Figura 15: Porcentaje de servicios desagregados por vivienda en el corregimiento.



Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada. 2018

Respecto a la calidad del agua que se recibe, se pidió a las personas que efectuaran una calificación de uno a cinco, a lo que el 50% puso la peor calificación y sólo el 11,8% dio la mejor calificación.

La calidad del agua que reciben los pobladores de la vereda tiene una relación directa con la salud. Según el Plan Corregimental El Manzanillo (2017), las enfermedades más comunes en el corregimiento están estrechamente relacionadas con la contaminación del aire, el agua y los suelos (Alcaldía de Itagüí. 2017). En este sentido, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano – IRCA, puede ser de gran utilidad para comprender mejor la situación, pues al consultar el índice del municipio de Itagüí para la vigencia 2016, se puede comprobar que la zona urbana no presenta ningún riesgo, pero en la zona rural se aprecia un riesgo bajo, que ya de por sí hace no apta el agua para el consumo humano, como bien se describe en la escala de valoración del índice. Un ejemplo de los riesgos a que se expone la población por no poseer un adecuado servicio de agua potable es, por ejemplo, el mosquito *Ae. Aegypti*, que es una especie adaptada a ambientes urbanos (Giraldo et al. 2018).

Por su parte, entre los habitantes que cuentan con servicio de alcantarillado, se preguntó respecto a la calidad de este servicio. A diferencia del servicio de agua potable, en este caso el 60% de los encuestados manifiestan una excelente calidad en el servicio y el 26% lo definen como muy bueno, lo cual indica un alto nivel de satisfacción por parte de la comunidad. Y es que una de las mayores dificultades que acarrea el déficit en materia de alcantarillado, quedó resumido por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el POMCA (2007) cuando afirma refiriéndose al problema de la falta de un adecuado tratamiento de aguas residuales, que la falta de una política integral en esta materia ha llevado a que este problema se convierta en uno de los conflictos ambientales más graves de los corregimientos. Lo que ha caracterizado las intervenciones en este campo, es la falta de una política integral y de largo plazo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 2007). Aquellos que disfrutaban del servicio de electricidad califican como excelente o muy bueno este servicio y existe una pequeña minoría que lo califica regular.

La frecuencia es un factor importante, ya que muchos de los servicios que reciben las personas no son constantes o permanentes. Por lo tanto, al preguntarle a las personas ¿cómo evalúa la continuidad en la prestación del servicio de agua? Sólo el 44% afirmó que era una frecuencia muy alta, mientras que un 22% manifestó que la frecuencia es baja o muy baja. Sobre la continuidad en la prestación del servicio de electricidad, la mayoría de los que reciben el servicio lo califican con una frecuencia alta o muy alta.

En resumen, el agua llega al 95,8% de la población del corregimiento. Es decir que hay al menos un 4,2% de población que no recibe el líquido y debe hacer uso de otros métodos descritos más arriba. De las viviendas con el servicio de agua, el 70% es suministrado por EPM y el 30% restante por acueductos veredales, que en muchos de los casos no cumplen los estándares necesarios de calidad, lo cual refleja el Índice

IRCA. Respecto a alcantarillado, la situación es más preocupante, pues el déficit llega casi al 10%, según las cifras oficiales de Planeación Municipal (2017). Esto tiene una incidencia directa en la contaminación de fuentes hídricas y en la aparición de enfermedades. Respecto al servicio de electricidad, las cifras oficiales y la encuesta registran una cobertura del 100%.

3. Conclusiones y recomendaciones

3.1. Conclusiones

El crecimiento informal de las ciudades tiene serios costos sociales, políticos y económicos, así como medioambientales. De hecho, en el municipio de Itagüí los asentamientos ilegales tienen algo en común y es que han albergado a población inmigrante, que ha llegado a estos lugares huyendo principalmente de la violencia y el conflicto armado, como se desprende del Plan Corregimental El Manzanillo (2017). Se identificó además que, entre las personas encuestadas, sólo un 27% de la población proviene del mismo municipio de Itagüí y que cerca de un 40% proviene de otros municipios del departamento o del país, incluso de departamentos lejanos. Esta situación, donde hasta se registra la presencia de extranjeros, recalca el fuerte carácter de territorio receptor de población inmigrante.

El fenómeno de expansión urbana en un municipio tan pequeño como Itagüí, termina afectando la zona rural constituida por el corregimiento, pues en la zonificación del suelo rural del municipio, se observa una amplia zona de expansión urbana, lo cual se motiva en la falta de suelos de expansión en otras zonas y significará a futuro una reducción del suelo rural, así como una mayor demanda de servicios públicos en la zona.

Por otra parte, actualmente en el municipio de Itagüí existen familias que no disponen de un acceso mínimo vital al agua¹ (Echeverri y Gónima. 2015), siendo uno de los casos más críticos el de la Vereda La María, donde sus habitantes deben hacer uso de tanques de almacenamiento o, en ocasiones, esperar a que los vehículos lleven el líquido. Pero la carencia de servicios en estos territorios no es sólo de agua, sino también, en algunos casos, de acceso a alcantarillado. Las zonas del municipio más afectadas por una y otra situación, son las zonas altas de las veredas, ubicadas en el corregimiento El Manzanillo, donde no existe cota de retiro de EPM y donde la demanda la suplen los acueductos veredales, con serias dificultades para garantizar la calidad. Respecto a estas deficiencias en la prestación de servicios públicos, La Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial, exige a las administraciones el garantizar la prestación de servicios a toda la población, pero esto no se logra por varios motivos, entre ellos, que el perímetro sanitario no sea inferior al perímetro urbano.

No obstante, la mayoría de "Planes de Ordenamiento Territorial se han limitado a decir que dichos perímetros son iguales, prohibiendo a las empresas prestadoras llevar el servicio por encima de este límite (Mazo. 2014). Pero, adicionalmente, se definen las zonas de alto riesgo y retiros, tanto de quebradas como de vías. En el POT de Itagüí no está permitido llevar servicios públicos si se trata de alguno de estos lugares, según el Acuerdo 046 de 2006.

Es decir, que por un lado la normatividad exige una prestación global de los servicios públicos a toda la población, mientras restringe las posibilidades del servicio a ciertas zonas, como las mencionadas, pero que a menudo están densamente pobladas, lo cual dificulta enormemente las posibilidades de la administración y deja a un sector de la población con limitaciones en dichos servicios. De esta manera, la cobertura y

¹ Dicha información es aportada por Gamalvel Ramírez, vocero de la Corporación Ambiental Casa de Todos y uno de los impulsores del Acuerdo sobre el mínimo vital de agua en el municipio. La información la aporta en entrevista con el periódico Ciudad Sur.

prestación de los principales servicios públicos en el corregimiento, se pueden resumir de la siguiente manera: El agua llega al 95,8% de la población del corregimiento. Es decir que hay al menos un 4,2% de población que no recibe el líquido y debe hacer uso de otros métodos descritos más arriba. De las viviendas con el servicio de agua, el 70% es suministrado por EPM y el 30% restante por acueductos veredales, que en muchos de los casos no cumplen los estándares necesarios de calidad. Como se pudo comprobar en los datos suministrados por el Plan Corregimental (2017), la calidad del agua es un factor determinante en la salud y calidad de vida de la población del corregimiento, lo cual refuerza la necesidad de proveer a toda la zona servicios de calidad. Respecto a alcantarillado, el déficit llega casi al 10%, según las cifras oficiales de Planeación Municipal (2017). Esto tiene una incidencia directa en la contaminación de fuentes hídricas y en la aparición de enfermedades. Respecto al servicio de electricidad, las cifras oficiales y la encuesta registran una cobertura del 100%.

5.2. Recomendaciones

Como se mencionó más arriba, en la génesis de los problemas y deficiencias en la prestación de servicios públicos del corregimiento El Manzanillo, se encuentran los asentamientos informales, donde se dificulta la ampliación de la cobertura por limitaciones normativas y se cuenta con una alta demanda que, en parte, es atendida de manera precaria por empresas veredales, al menos para el servicio de agua. Por lo tanto, parte de la solución pasa por atender inicialmente estos problemas de informalidad, a través de programas y proyectos de legalización.

Para el éxito de los programas de titulación o legalización, se define como un requisito indispensable de toda iniciativa, la existencia de un componente de comunicación y divulgación que esté siempre presente en las primeras fases, con el

propósito de motivar a las diferentes familias sobre los beneficios del acceso a la titularidad, pues en ocasiones la participación de las personas no es la esperada. Esto es importante, toda vez que la regularización se convierte en una prioridad, si se pretende optimizar la prestación de servicios públicos en varias zonas del corregimiento. Por otra parte, es imposible que el municipio de Itagüí alcance óptimos estándares de sostenibilidad, si no logra controlar la expansión urbana informal y si no se atienden las necesidades de una parte importante de la población respecto a legalización de asentamientos y prestación de servicios públicos. En otras palabras, la expansión urbana informal es determinante y detonadora de varias problemáticas, donde al menos en materia de servicios públicos, no controlarla significa alimentar un círculo vicioso, donde siempre habrá un sector de la población con necesidades de legalización y de acceso a servicios.

Una vez se controle la expansión informal en las laderas del corregimiento El Manzanillo, es importante identificar y caracterizar plenamente aquella población que se encuentra por fuera del perímetro urbano, sanitario o más allá de la cota de servicio, pues en estos casos, para el servicio de agua potable donde las empresas no pueden llevar el servicio, la única alternativa son los acueductos veredales, a los cuales es urgente prestarles mayor asistencia técnica y financiera, que les ayude a mejorar los estándares de calidad, especialmente en materia de potabilidad, ya que las mediciones del Índice IRCA catalogan la calidad del líquido como no apta para consumo. Con ello se pueden mejorar simultáneamente los indicadores de salud asociados a enfermedades por mala calidad del agua y, en general, mejorar la calidad de vida de la población más afectada por las deficiencias del servicio.

4. Bibliografía

CAJAMARCA, Camilo Andrés. LOVICH, Verena. (2014) Consideraciones sobre la movilidad social y los servicios públicos domiciliarios en Bogotá, 2004-2011. Revista

Científica General José María Córdova, Bogotá, Colombia, julio-diciembre, 2014
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Vol. 12, Núm. 14, pp. 95-109

CIUDAD SUR. (2015) En Itagüí aún no se cumple el Acuerdo del Mínimo Vital al Agua. 12 de julio 2015. Consultado en: <http://www.ciudadsur.co/2015/07/12/en-itaguei-aun-no-se-cumple-el-acuerdo-del-minimo-vital-al-agua/>

COSTA, Aline. HERNANDEZ, Agustín. (2010) Análisis de la situación actual de la regularización urbana en América Latina: La cuestión de la tenencia segura de los asentamientos informales en tres realidades distintas: Brasil, Colombia y Perú. Revista INVI. N° 68 / May 2010 / Volume N° 25: 121-152 121.

DELGADILLO, Víctor. (2016) Ciudades iletradas: orden urbano y asentamientos populares irregulares en la ciudad de México. Territorios 35 / Bogotá, 2016, pp. 81-99.

GIRALDO, T. ÁLVAREZ, J. PARRA, G. (2018) Factores asociados a la infestación domiciliar por *Ae. aegypti* en el corregimiento el Manzanillo, municipio de Itagüí (Antioquia) año 2015. Rev. Fac. Nac. Salud Pública.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Subdirección de Salud Ambiental (2018) Informe nacional de calidad del agua para consumo humano inca 2016. Bogotá, D.C., mayo de 2018.

MOLINA ARREDONDO, Angela Maria. HOYOS AGUDELO, Gabriel Mauricio (2009) Historia de Itagüí. Ediciones Gráficas. Medellín.

OCAMPO, Gloria Isabel. (2003) Urbanización por invasión, conflicto urbano, clientelismo y resistencia en Córdoba (Colombia). *Revista colombiana de Antropología*. Vol.39. Bogotá Ene/dic.

VERGARA, Juan Carlos. MAZA, Francisco Javier. (2017) Valoración de los servicios públicos domiciliarios de Cartagena de Indias (Colombia). Revista Facultad de Ciencias Económicas. Vol. xxv (1), junio 2017, 95-103.